

Colombia

La economía va bien, pero la seguridad va mal

Alejandro Mendible Z.

En el editorial del periódico El Tiempo de Bogotá, del domingo 3 de julio, titulado «Goles de la muerte», al comentar el asesinato de defensa central de la selección colombiana de fútbol Andrés Escobar, se decía que la situación del país se podía resumir en ese titular. La noticia del suceso recorrió el mundo y un corresponsal internacional comentó desde los Estados Unidos la validez del comentario del técnico de la selección Francisco Maturana en el sentido de que, «en Colombia las amenazas deben ser tomadas en serio». El protuberante fenómeno de la violencia es una consecuencia fatídica del pasado pero continúa siendo el más grave peligro que confronta la sociedad colombiana. Según estadísticas oficiales, la cifra anual de muertes por homicidios pasó de 19.462 en 1988 a 29.413 en 1992, y sigue en aumento.

Por otra parte, en Colombia la economía ha mejorado sustancialmente en los últimos años y se ha iniciado un proceso de internacionalización, el cual ha merecido comentarios favorables. Según estadísticas recientes, la tasa de su crecimiento económico se encuentra por encima del demográfico; en esto contrasta significativamente con la tendencia adversa que se ha producido en Venezuela. También, circunstancias favorables surgen en el presente para estimular el optimismo colombiano. La helada producida recientemente en Brasil le crea nuevas posibilidades en el mercado internacional para la venta del café. Y los anuncios de la bonanza petrolera tocan las puertas del hermano país. A partir de 1996 las reservas petroleras de Cusiana y Capiagua, consideradas las más extensas del mundo occidental, comenzarán a producir, y se pronostica una prosperidad que este país no ha tenido en mucho tiempo.

Pero el crecimiento económico no

ha logrado revertir todavía la desigualdad social, condicionante siempre presente para la manifestación de la violencia. Según el censo del año pasado, Colombia cuenta con 35.886.280 habitantes, de los cuales el 73.82% viven en las áreas urbanas, con una clara tendencia hacia la urbanización. La misma fuente revela que casi una quinta parte de los colombianos cocinan todavía con leña, cuando el gas y la electricidad son de uso rutinario hace más de tres décadas en países medio desarrollados. También la Alcaldía de Bogotá reconoce que existen 846 barrios piratas en la capital. Y el presidente electo acepta que el 47% de los colombianos viven en la pobreza.

El gobierno de César Gaviria representa un importante cambio generacional y ha creado la sensación de una nación en movimiento. Adoptó una nueva constitución en 1991, procurando darle una nueva orientación a la gobernabilidad al país. Se controlaron los desarreglos económicos: la inflación se mantuvo en niveles bajos, llegando el año pasado al 20%; se mantuvieron las tasas de intereses de una manera estable; y se produjo la revaluación del peso. Se crearon mudanzas estructurales en el ordenamiento legislativo para favorecer el comercio externo, las actividades financieras y laborales. Gaviria se enfrentó al narcoterrorismo y logró como máximo trofeo la baja de Pablo Escobar, figura descolante del cartel de Medellín. Consecuentemente, Gaviria se convirtió en un fenómeno político, y en su último año de gobierno alcanzó altos porcentajes de popularidad.

Mediado por estas circunstancias se producen las elecciones presidenciales. Como lo pauta la nueva constitución, por primera vez se producen dos vueltas para buscar que el nuevo presidente electo cuente con una ma-

yoría representativa y ampliar sus bases de legitimación. Las diferentes opciones finalmente quedaron reducidas a las tradicionales constantes de la política colombiana: liberalismo o conservadurismo. Ernesto Samper o Andrés Pastrana. En estas elecciones ambos candidatos buscaron, por razones obvias, capitalizar la popularidad del gobierno Gaviria. Para un reconocido analista político, los candidatos compartían la doctrina neoliberal del «impulso hacia afuera» y tenían posiciones similares en relación al problema de las drogas y del tratamiento de las guerrillas.

Pastrana sustentaba que Colombia tuvo durante mucho tiempo un modelo de economía cerrada bajo el esquema de sustitución de importaciones, el cual, si bien en un principio influyó en el desarrollo de una industria nacional, mostró después síntomas de agotamiento, ya que ante la falta de competencia el aparato productivo no se vio en la necesidad de modernizar, de innovar, de mejorar su calidad y de introducir nuevas tecnologías. Y Samper anunciaba que durante los próximos años Colombia tendrá la oportunidad de realizar varios anhelos que por largo tiempo habían permanecido en el campo de la utopía: luchar contra la pobreza y mejorar las condiciones para poner fin a la violencia. En el curso de la campaña, los candidatos discreparon en relación al ritmo y alcances del programa de privatización de las industrias del Estado, de las barreras tarifarias y de cómo prevenir los efectos del rápido crecimiento económico sobre las clases trabajadoras. Finalmente, en medio de una alta participación electoral, resultó electo el candidato liberal Ernesto Samper, de 43 años, abogado y economista, ex ministro de Desarrollo y ex embajador en España.

Las razones para el triunfo liberal son atribuidas por los comentaristas políticos colombianos a la unidad del Partido y al trabajo de su maquinaria nacional. En el campo contrario, en medio de la contienda, el conocido político Alvaro Gómez Hurtado declaraba que «en Colombia hay conservadurismo, pero no hay partido conservador». A la victoria liberal también contribuyó la actitud de algunos sectores reaccionarios de la Iglesia, que con declaraciones imprudentes contribuyeron a formar la avalancha electoral en favor del candidato con mayores posibilidades de triunfo. Samper obtuvo unos 32 mil votos a favor en la primera vuelta, y en la segunda cer-

ca de 75 mil, es decir, duplicó la diferencia a su favor.

Pocos días después de las elecciones surge a la luz pública el escándalo de las grabaciones del cartel de Cali, que supuestamente comprometen la honorabilidad de los resultados electorales. Algunas fuentes noticiosas comentaron, como algo insólito, que las intenciones del cartel se orientaba a «comprar» cinco posiciones claves en el nuevo gabinete, incluyendo el Ministerio de la Defensa.

En el incidente creado aparecen como fuentes de información el portavoz del Departamento de los Estados Unidos, Michael Mc Curry, el embajador del mismo país Monis Busby, un nuevo grupo denominado «colombianos honestos», y Alain Labrouse presidente del instituto, localizado en París, «Observatorio Geopolítico de Drogas» (OGD). Entre las interpretaciones del incidente, algunos observadores señalan que detrás del escándalo se encuentra la intención velada norteamericana de aplicar la conocida política de «zanahoria y garrote», en el sentido de manipular la autonomía de las decisiones del nuevo gobierno en aspectos relacionados con los sensibles asuntos de la extradición y la política de sometimiento de los narcotraficantes. Recientemente, la cancillería colombiana de manera enérgica le ha contestado a los Estados Unidos que «las grabaciones fueron manipuladas» y que no aceptarán la ingerencia de ese país en el establecimiento de su política contra el narcotráfico.

Para contrarrestar los efectos del escándalo, el presidente electo ha declarado que «Colombia no puede ser el Vietnam de la lucha contra las drogas». Y el vicepresidente Humberto de la Calle le declara al periódico El Tiempo que «están interesados en dejar caer la basura internacional sobre nuestro país».

PERFIL DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA

En Colombia todo pasa, mientras pasa el tiempo, pero la violencia sigue siempre presente. En los últimos años la droga ha pasado a competir con la política como la principal causal de la violencia. Se le atribuye al presidente Virgilio Barco haber comentado, en 1988, después de los injustificables asesinatos de Guillermo Cano, dueño del periódico El Espectador, y de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Relaciones Exteriores, que «el

narcotráfico ha tenido dos fases en Colombia: la primera fase fue la de diversión, de la gran orgía, donde todo el mundo se acostó con él y nadie se dio cuenta; fue la fase de la tolerancia, cuando la violencia sólo afectaba a sus protagonistas directos. Después vendría la etapa del «destape» cuya macabra historia no ha terminado todavía.

La historia de Colombia es una historia violenta.

La violencia política surge en el mismo momento en que, concluida la guerra de Independencia con la batalla de Boyacá en 1819, las rivalidades continuaron y en 1828 se produce el atentado contra el Libertador. Como respuesta, Bolívar establece la dictadura. Con este hecho se abre un período conservador, el cual se prolonga hasta el inicio de la década de 1850, cuando se produce el movimiento de la «Reforma Liberal». El movimiento de las reformas presenta en Colombia aspectos diferentes al de otros países de la América Latina. Por ejemplo, en México éstas surgen para derrocar una dictadura irresponsable del Gen. Santa Ana. En Colombia, por el contrario, se producen por una victoria electoral del partido liberal que se encontraba en la oposición al gobierno de Tomás C. Mosquera. Sin embargo el advenimiento del liberalismo cambió el sistema político, pero no garantizó la paz. El movimiento se encontraba escindido en tres tendencias antagónicas: los gólgotas, que mostraban sus preferencias proclericales; los artesanos, que atacaron al gobierno por haber reducido las tarifas arancelarias; y los draconianos, que se manifestaban por un gobierno fuerte y desconfiaban de las abstracciones ideológicas. En 1863, un mediano consenso se produjo con la Constitución de Río Negro, que le permitió al país avanzar hacia una moderada institucionalización de contenido liberal. Por tal razón, el historiador norteamericano David Bushnell señala que en Colombia se presentó «la forma de liberalismo más avanza-



Samper: Colombia no puede ser el Vietnam de la lucha contra las drogas

da que alcanzó ninguna nación latinoamericana en el pasado siglo».

El dominio del liberalismo se interrumpe en la década de 1880 durante la presidencia del cartagenero, Rafael Núñez. El Dr. Núñez representó la manifestación del positivismo y se impuso con el slogan «reforma o catástrofe». Bajo el control de los conservadores el país terminó el siglo, y la sociedad tradicional que entraba al siglo XX era agraria y señorial, organizada alrededor de la hacienda y del comercio, según el estilo de vida que forjó el Nuevo Reino de Granada a partir del siglo XVII, cuando se fortalecieron la vida rural y las estructuras agrarias señoriales. En el presente siglo, la violencia dibuja en la atormentada sociedad colombiana una escalada incesante, y en su recorrido van apareciendo un número crecido de hitos dolorosos, los que a su vez evidencian una tendencia marcada hacia una irracionalidad bárbara.

El inicio del siglo es anunciado por la Guerra de los Mil Días, donde las fuerzas liberales y conservadoras dividieron triunfos en las batallas de Peralonso y después Palonegro, cuando miles de combatientes de ambos bandos resultaron inmolados bajo las incesantes cargas de machete. En 1928, bajo el gobierno del conservador Abadía Méndez, ocurre la tristemente célebre masacre de las bananeras. En 1948, se produce el Bogotazo, «una revolución social frustrada», producido por el asesinato de Gaitán. Más de 300 mil muertos quedaron como estela de la violencia que se proyectó de manera interrumpida

hasta 1957, cuando surge el acuerdo entre los principales partidos: El Frente Nacional. La política frentista estableció una democracia limitada de manera formal, hasta el Paro Cívico Nacional celebrado en 1977. La violencia se redefine durante el período y se presentan las primeras acciones destacadas dentro de un nuevo contexto de bandolerismo político. La nueva situación se presenta por la pérdida de la legitimidad de algunos grupos insurreccionales.

También contra el Frente Nacional surgieron agrupaciones disidentes importantes, tales como el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), la Alianza Nacional Popular (Anapo) y el Frente Unido, con el sacerdote Camilo Torres. Otra manifestación importante de mencionar fue la Reforma Agraria, impulsada por el presidente Lleras Restrepo; pero ésta se orientó más hacia la colonización de territorios baldíos en regiones periféricas que en una verdadera justicia distributiva del campesino. Con el tiempo nuevas áreas, como por ejemplo, Urabá y el Quindío, fueron incorporadas al mapa geográfico de la violencia.

Cuando termina el Frente se inicia un ciclo de apertura democrática. Primero, el presidente Turbay Ayala (1978-1982), sobreestimando las fuerzas militares de su país, se embarcó en una «alternativa represiva» como salida del dilema político creado con las guerrillas. Pero los resultados no fueron los esperados, y por el contrario se agravó la crisis de la democracia restringida. Después, el siguiente presidente electo, Belisario Betancourt, fue uno de los primeros y grandes propulsores de los diálogos por la paz con los grupos guerrilleros. Sin embargo, la violencia durante su gobierno alcanzó altos niveles: se produjo el asalto al Palacio de Justicia por el M-19, con gran número de muertos. También mediante los diálogos de paz, las FARC, primera fuerza guerrillera, crearon un partido político legal: La Unión Patriótica (UP). El intento fracasó al ser liquidados dos mil líderes de esta organización en menos de dos años, entre ellos dos candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo.

El proceso de pacificación después de 1986, no obstante haber confrontado grandes dificultades, ha seguido, y en la actualidad son varios los movimientos guerrilleros desmovilizados. La viabilidad histórica y la justificación de la lucha guerrillera ha llegado, según entendidos en el tema, a

un punto donde ni la fuerza pública por sí sola puede liquidar el problema de la violencia revolucionaria, ni los grupos armados que buscan el poder pueden lograrlo por la fuerza. Se impone, pues, una salida básicamente política. Hasta el presente se han desmovilizado los grupos: el 19 de abril (M-19), el Quintín Lama, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Comité de Renovación Socialista (una disidencia del Ejército de Liberación Nacional). Y noticias recientes comentan que «la guerrilla colombiana quiere diálogo de paz con el gobierno de Samper».

Por otra parte, desde el punto de vista militar, el ejército ha logrado el fortalecimiento del aparato de inteligencia y ha conseguido grandes logros con el sistema de beneficio y recompensas por delación, que ha inducido a muchos insurgentes para denunciar o entregar a sus comandantes.

Entonces está quedando el narcoterrorismo como la primera causa generadora de la violencia. Los motivos son obvios. Colombia pudo superar la década perdida, que castigó por igual al resto de América Latina, gracias al narcotráfico. En tal sentido, el peso inclemente de la deuda externa es mucho menor que el soportado por la región. Según estimaciones de investigadores de la Universidad Nacional, el narcotráfico generaría entre uno y 2,5 millones de empleos directos, cifra no despreciable si se tiene en cuenta que sobre una población activa de 13 millones, la seguridad social sólo registra 3,5 millones de afiliados. Y el Centro de Investigaciones y Educación Popular (CINEP) estima que la economía ilegal aporta al torrente de la economía unos 4.500 millones de dólares, aunque ese monto se reduce a 600 millones, según otras fuentes.

Considerando estas magnitudes, prácticamente todo el ordenamiento nacional, de una u otra manera, ha sido tocado por los alucinantes efectos de la droga. Recuerde el lector cómo en las elecciones presidenciales de 1990, tres candidatos fueron muertos en la violencia instigada por la droga. En las recientes elecciones, los candidatos Andrés Pastrana y Ernesto Samper fueron afectados por la violencia del narcoterrorismo. Y las «sospechas» de sus alcances infinitos, en esta oportunidad llegan a la misma Fiscalía de la Nación.

Hoy los intereses del narcotráfico han sido golpeados en cierto grado, pero nadie pone en duda su gran poder. El nuevo rompecabezas del nar-

cotráfico está compuesto por más de 200 grupos, cuya atomización puede desembocar en cualquier momento en un nuevo capítulo de violencia.

NARCOTRAFICO Y SUS INCIDENCIAS EN LA POLITICA EXTERIOR

El palacio de San Carlos, en Bogotá, tiene a Washington y Caracas como dos objetivos importantes. En relación a la segunda, si reflexionamos, podría especularse sobre lo que se «cocina» en torno a la reciente designación de Rodrigo Pardo, ex-embajador de Venezuela, como nuevo canciller de Colombia. Pero en ambos casos, el acondicionamiento y la injerencia del tema de la drogas cuentan de manera significativa para el formulamiento de unas fluidas relaciones.

Con los Estados Unidos, Colombia empezó por desarrollar una economía agro-exportadora más competitiva que complementaria durante el siglo XIX. El acercamiento se produce por las exportaciones del café. Pero en 1903, al quitarle Panamá a Colombia, Estados Unidos le propina la mayor afrenta nacional experimentada en su vida independiente. Para moderar la injuria, durante la presidencia de Pedro Nel Ospina, en 1922, Colombia recibió 25 millones de dólares como indemnización por la pérdida de Panamá, y también se recibieron grandes empréstitos norteamericanos para la construcción de carreteras y ferrocarriles. En los tiempos de la preguerra, Estados Unidos estimó la importancia de Colombia por la proximidad al Canal. El interés por su posición estratégica motivó que compañías norteamericanas se interesaran en establecer actividades, y de esta manera contrarrestaran la influencia del capitalismo alemán. Durante la Guerra Fría, en Colombia se desarrolló un capítulo muy especial durante el Bogotazo en 1948; además, fue el único país latinoamericano en enviar un batallón a la Guerra de Corea. En la actualidad las relaciones con Estados Unidos se encuentran basadas en los intereses de la integración económica, del comercio exterior, y en la política de anti-narcóticos.

Sobre nuestro país merece destacar lo expresado por Orlando Fals Borda, que ni Colombia ni Venezuela pueden entrar solitarias al próximo siglo. Pero en ambos casos lo que más le duele a la diplomacia colombiana son las enormes ganancias que no se pueden controlar.